



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Maria Lucía Flórez
DEMANDADO	Porvenir S.A.
LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA	Guillermo de Jesús Castañeda Castañeda
RADICADO	05-001-31-05-017-2019-00742-01
TEMA	Pensión de sobreviviente
DECISIÓN	Confirma sentencia

El veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **114** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **MARIA LUCÍA FLÓREZ** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍA PORVENIR S.A.**, y vinculado en calidad de litisconsorte necesario por pasiva **GUILLERMO DE JESÚS CASTAÑEDA CASTAÑEDA**, con radicado **05-001-31-05-017-2019-00742-01**.

• **PRETENSIONES:**

La demandante pretende se declare que el señor **ANDRÉS FELIPE CASTAÑEDA FLOREZ** dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. Que le asiste derecho a que le sea reconocida y pagada la pensión de sobreviviente con ocasión a la muerte del causante el 24 de septiembre de 2017, en calidad de madre dependiente económicamente de este último. Como consecuencia, se condene a **PORVENIR S.A.** a pagar la pensión de sobrevivientes, con las correspondientes mesadas adicionales de diciembre desde el 24 de septiembre de 2017, los intereses moratorios y/o la indexación.

- **HECHOS:**

Frente a los hechos manifestó que el causante ANDRÉS FELIPE CASTAÑEDA FLOREZ falleció al 24 de septiembre de 2017, encontrándose válidamente afiliado a PORVENIR S.A. Que la demandante y el señor GULLERMO DE JESÚS CASTAÑEDA CASTAÑEDA son los padres del afiliado fallecido. Que para el momento de la muerte de este contaba con más de 50 semanas cotizadas al sistema general de pensiones, dentro de los 3 últimos años anteriores. Afirma que dependía económicamente de su hijo, quien era una persona soltera, sin hijos. Que reclamó pensión de sobreviviente ante PORVENIR S.A. en calidad de madre beneficiaria, la cual fue negada por no acreditar la condición de dependencia económica al momento del fallecimiento. Que al momento de la muerte de su hijo vivía con este bajo el mismo hogar, junto con su cónyuge Guillermo Castañeda. Informa que actualmente percibe una pensión equivalente al mínimo legal de sobrevivientes por el fallecimiento de otro hijo, por hechos ocurridos en el año 1997. Que su cónyuge Guillermo Castañeda, cuando sus hijos eran pequeños se pegó al vicio y del licor y perdió su trabajo, por lo que ella era quien debía rebuscarse la comida para ayudarles con el estudio, hasta que su otra hija CLAUDIA VIVIANA creció y la ayudó con los gastos del hogar. Que junto con sus hijos recibían maltratos por parte del señor Guillermo Castañeda, incluso este mantuvo una relación amorosa con otra mujer de la cual hay dos hijas. Que la negativa asumida por la entidad desconoce la realidad fáctica y jurídica, puesto que dependía económicamente de su hijo, a pesar de que percibiera una pensión de sobreviviente de un salario mínimo. Que esa pensión es destinada al pago de gastos básicos del sostenimiento congruo de su núcleo familiar. Que, en septiembre de 2017, cuando murió su hijo Andrés Felipe, este pagaba \$900.000 de arriendo, \$200.000 de servicios de EPM, \$140.000 de CLARO, \$500.000 en mercado y estos gastos eran repartidos entre ella y su hijo. Que hace aproximadamente hace 10 años está pagando un préstamo, por lo que recibe la mitad del dinero reconocido.

- **CONTESTACIÓN:**

Porvenir S.A.: Frente a los hechos manifestó que es cierta la fecha de fallecimiento de Andrés Felipe Castañeda y que se encontraba afiliado a PORVENIR S.A. Que acepta que la demandante y el señor Guillermo Castañeda Castañeda son los padres del fallecido, no obstante, se debe acreditar por parte de estos el requisito de dependencia económica. Que no le consta si el afiliado era soltero y no tenía hijos por cuanto es algo de carácter personal del afiliado. Que no se acepta la afirmación que la demandante dependía económicamente del causante ya que como se confiesa en los hechos, esta contaba con una pensión de sobrevivientes reconocida por Colpensiones por lo que no dependía del causante. Que es cierta la reclamación de pensión de sobrevivientes a PORVENIR S.A. Que se acepta que el causante vivía bajo el mismo hogar con sus progenitores en cuanto implica que este se beneficiaba de la vivienda y servicios complementarios que se le proporcionaban. Que se acepta que la demandante goza de una pensión reconocida por Colpensiones con ocasión a la muerte de su otro hijo Wilson Guillermo, por lo que ha llevado una vida independiente, por cuanto no se ve lógica para pensar que dependía económicamente de su hijo Andrés Felipe. Que se acepta la confesión que hace sobre su hija Viviana que le ayudaba cuando creció por lo que se reitera que la ayuda que le daba el causante no era necesaria para la demandante. Que no le constan las situaciones referentes a su cónyuge por ser por situaciones referentes a la vida íntima y personal del mismo. Que se acepta las confesiones en cuanto al reconocimiento pensional a la demandante y sobre la prestación pensional de destina al pago de los gastos básicos del sostenimiento congruo de la familia. Que no le consta la cantidad de dinero que el causante destinaba para cubrir ciertos gastos, sin embargo, se acepta que los gastos eran repartidos entre la demandante y su hijo. Que no le consta que al demandante este pagando un préstamo. Que en cuanto al último hecho no se trata de un hecho. No se opone a que se declare que el señor Andrés Felipe dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, se opuso al resto de pretensiones. Formuló varias excepciones de previas y de fondo.

Guillermo de Jesús Castañeda Castañeda: En calidad de litisconsorte necesario por pasiva no se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes es la demandante.

• **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 6 de marzo del 2022, el Juzgado Decimoséptimo laboral del Circuito de Medellín **DECLARÓ** que a la demandante le asiste el derecho a que PORVENIR S.A. le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo Andrés Felipe Castañeda Flórez a partir del 27 de septiembre de 2017, día del fallecimiento del afiliado.

Como argumentos de su decisión expuso que es clara la existencia de dependencia económica. Que el solo hecho, como lo hizo PORVENIR S.A., de decir que por estar pensionada la demandante no dependía económicamente, argumento que no es de recibo. Que el hecho que reciba una pensión no la convierte en alguien autosuficiente. Que de conformidad a lo establecido por la ley podrán estar llamados los padres a reclamar dicha prestación si dependían de forma total y absoluta, es claro que esta expresión se declaró inexecutable en sentencia C-111/2006 en la cual se determina que ni se puede exigir dependencia total y absoluta, pues los padres lo que deben acreditar es una dependencia.

CONDENÓ a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la demandante la suma de \$55.143.980 por concepto retroactivo pensional liquidado entre el 28 de septiembre de 2017, día siguiente a la muerte del causante y el 31 de agosto de 2022. A partir del mes de septiembre de 2022 PORVENIR S.A. continuará reconociendo y pagando a la demandante una mesada pensional incluida la adicional de diciembre, equivalente a \$1.000.000, sin perjuicio de los aumentos que disponga el Gobierno Nacional para el salario mínimo legal de cada año. **AUTORIZÓ** a PORVENIR S.A. a que del retroactivo adeudado, se realicen los descuentos en salud a que haya lugar. **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la demandante los intereses moratorios a partir del 22 de abril de 2018 hasta el momento de pago de la obligación. **DECLARÓ** que las excepciones propuestas quedan resueltas en los términos expuestos en la parte motiva de la demanda. Finalmente, **CONDENÓ** en costas procesales a la demandada.

- **APELACIÓN:**

Porvenir S.A.: Presentó recurso de apelación, manifestando que, si bien se logró establecer que la demandante se encontraba pensionada por parte de Colpensiones, por el cual recibe una pensión de un salario mínimo, esta contaba con ingresos fijos y estables provenientes de una mesada pensional por lo que podría proveer su propio sustento. Que conforme a la manifestación de la juez, por el hecho de tener un establecimiento de comercio a su nombre no quiere decir que esta cuente con recursos propios y basada esta teoría en la respuesta que emitió la DIAN frente a la no declaración de renta de la demandante, este no es un hecho que acredite que la señora María Lucía no contaba con recursos superiores a ese salario mínimo. Que la demandante debería tener al menos cuatro salarios mínimo mensuales si se hace un comparativo razonable en virtud de que estas sumas están tasadas en salarios mínimos, la cuantificación de estos ingresos a través del tiempo. Que el hecho que la demandante no declare renta no se traduce en que no devengue sumas superiores a un salario mínimo, ingresos que se pueden constatar en su registro mercantil y de otros hechos probados en el proceso, como la soltura económica de la que gozaba la demandante como permitirse pagar gastos universitarios de una de sus nietas. Que la entidad acoge una tesis distinta a la del despacho en cuanto no existía una dependencia económica que entendiera que la demandante no puede sostenerse o mantenerse, contrario a ello existe una comunidad de gastos. Que según lo dicho por el señor Guillermo de Jesús, de igual forma es evidente que la demandante, además de recibir ingresos para su sustento, no era su único medio de subsistencia. Que la juez de instancia plasmó en su teoría que los ingresos de Andrés Felipe eran superiores al salario mínimo, pero era sobre esta suma la que cotizaba. Que en cuanto a los intereses moratorios e indexación Porvenir S.A. no se encuentra en mora de reconocer obligación alguna, toda vez que realizó el pago efectivo de los dinero encontrados en la cuenta del afiliado fallecido a su padre, el señor Guillermo de Jesús Castañeda, por lo que no existen recursos en la cuenta que permitan solevantar una pensión en favor de la demandante María Lucía Flórez. Que al realizar el pago del retroactivo pensional dentro del tiempo oportuno, solicitó se absuelva de los cargos de impuestos a Porvenir S.A.

- **CONSULTA:**

El proceso también será conocido en grado jurisdiccional de consulta con ocasión a que la sentencia no se resuelve en favor del señor Guillermo de Jesús Castañeda Castañeda, quien fuera vinculado al proceso de manera necesaria.

- **ALEGATOS:**

Porvenir S.A.: Basó sus alegatos en argumentos similares a los expuestos con el recurso de apelación. Añadió que, de conformidad al argumento de la juez de primera instancia frente al establecimiento comercial y la **declaración de renta existe un margen de 4 salarios mínimos** que podían entrar libremente en los ingresos de la demandante sin verse obligada a declarar renta sobre ellos, por lo que no puede constituirse como prueba de que la demandante tenía ingresos de un salario mínimo, por cuanto se evidencia que no es así. Que Porvenir S.A. siempre ha estado dispuesto a reconocer y pagar la pensión de sobrevivencia generada por el deceso de Andrés Felipe Castañeda Flórez a la personas o personas que acrediten su condición de beneficiaria y cumpla con los requisitos legales. Que lo anterior no quedó demostrada la dependencia económica de la madre respecto su hijo fallecido. Que hubo una flagrante confesión por parte de la demandante en cuanto a la ayuda que le deba su hijo la cual era esporádica, no determinante. Que recibía ayuda de sus otros hijos y devenga sus propias fuentes de ingreso permanentes de la pensión vitalicita que recibe, como el hecho de ser propietarios de la casa que habita, y tener un establecimiento de comercio a su nombre. Que no quedó demostrado qué gastos tenía la madre del acusante. Que son los padres quienes deben acreditar su condición de beneficiarios y que dependían económicamente de su hijo. Que de conformidad a la sentencia SL-2490 de 2019 de la Corte Suprema no se puede entender que cualquier contribución hecha por un hijo se considere con la capacidad de hacerlo beneficiarios argumentando dependencia económica. Que, si bien la dependencia no tiene que ser total y absoluta, esta debe estar sujeta a un criterio de auxilio sustancial o necesidad. Que por falta de material probatorio que acrediten lo expresado, no se pudo imponer condenas a Porvenir S.A., por

lo anterior solicitó que se revoque la sentencia de condena de primera instancia.

CONSIDERACIONES:

La demandante aspira al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo Andrés Felipe Castañeda Flórez a partir del 27 de septiembre de 2017; la demandada se opuso a tal condena, al señalar, entre otras razones, que la actora no acreditó la calidad de beneficiaria; finalmente, el juzgado del conocimiento le dio la razón a la demandante, al haber acreditado que dependía económicamente del afiliado fallecido.

De acuerdo a lo anterior, los **problemas jurídicos** a resolver de conformidad con las apelaciones formuladas y a que el proceso se conocerá en grado de consulta, abarcará los siguientes interrogantes: *i)* ¿la demandante acredita la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento su hijo Andrés Felipe Castañeda Flórez, por depender económicamente de este?.

Antes de resolverse los problemas jurídicos planteados, es necesario hacer un breve recuento de las pruebas anexadas por las partes:

- Copia de la cédula de ciudadanía de la demandante¹
- Copia de la cédula de ciudadanía del causante.²
- Registro civil de defunción del joven Andrés Felipe Castañeda Flórez, en el cual se certifica que la muerte ocurrió el 24 de septiembre de 2017.³
- Registro civil de nacimiento de Andrés Felipe Castañeda Flórez, en donde se corrobora que nació el 13 de abril de 1984, y que sus

¹ Folios 17.

² Folios 18.

³ Folios 19 y 20.

padres son la demandante y el señor Guillermo de Jesús Castañeda Castañeda.⁴

- Reclamación de prestaciones económicas a PORVENIR S.A.⁵
- Extractos bancarios del causante de Bancolombia.⁶
- Certificado de arrendamiento Las Torres.⁷
- Historia laboral de Andrés Felipe Castañeda Flórez.⁸
- Formulario de solicitud por sobrevivencia para padres.⁹
- Copia de comunicados donde se le niega a la demandante la petición del reconocimiento de la prestación pensional por la muerte de su hijo Andrés Felipe Castañeda Flórez por parte de PORVENIR S.A., argumentando falta de dependencia económica.¹⁰
- Copia de resolución 06838 del 21 de abril de 2005 donde el Instituto de Seguros Sociales le reconoce a la señora Maria Lucía Flórez la pensión de sobreviviente con ocasión a la muerte de su hijo Wilson Guillermo Castañeda a partir de 23 de julio de 1998.¹¹
- Documento donde Porvenir S.A. realizó la devolución de saldos por solicitud por sobrevivencia al señor Guillermo de Jesús Castañeda Castañeda.¹²
- Registro mercantil, donde figura la señora Maria Lucía Flórez como propietaria del establecimiento de comercio Comercializadora FX Sport Wear.¹³

i) Calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes

Atendiendo a la fecha del fallecimiento del señor Andrés Felipe Castañeda Flórez, la normatividad aplicable al caso es la consagrada en el artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, el cual

exige que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste; así mismo, indica el artículo 73 de la ley 100 de 1993, que remite al artículo 46 ibídem, el cual fue modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003, que el afiliado fallecido debió haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte.

En el caso objeto de estudio no se discute que el afiliado fallecido dejó causada la pensión por tener el número requerido de semanas, pues cuenta en los 3 años anteriores a su muerte con 158,⁵⁷ de semanas de cotización, lo cual se corrobora con la historia laboral aportada en las páginas 38 a 43 de la demanda digitalizada.

En cuanto a la calidad de beneficiaria, si bien el parentesco se encuentra plenamente acreditado con el registro civil de nacimiento, donde se observa que la demandante es la madre del causante, se debe demostrar suficientemente la dependencia económica del asegurado fallecido, que es el tema sobre el cual se circunscribe el problema jurídico y los alegatos formulados.

Partiendo de lo anterior, debe decirse que esta Sala ha entendido que *“La dependencia económica es la sujeción de una persona hacia otra, por proporcionarle esta lo necesario para sustentar su vida y llevarla de manera moderada, sencilla, decorosa, de acuerdo a su posición social”* (Sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, del 13 de marzo de 1998)

En este mismo sentido, se tiene que desde el año 2003, la Corte Suprema de Justicia hizo claridad del significado de dependencia económica. En sentencia 19.867 del 27 de marzo de 2003 sostuvo que esta no debe entenderse como total y absoluta, dándose la posibilidad de admitir que los padres dependientes económicamente de alguno de sus hijos se puedan beneficiar en forma conjunta de otros hijos o por actividades dirigidas a obtener la subsistencia, siempre que las ayudas no se conviertan en aportes autosuficientes que hagan desaparecer la dependencia.

Insistiendo frente al tema de la *dependencia económica*, resulta necesario recordar lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006, en la que indica que para que sea procedente el reconocimiento de la prestación reclamada, frente a la dependencia económica debe suponerse “... *un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta... Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que, en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario.*”

A efectos de determinar en cada caso particular, si una persona es o no dependiente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas a partir de la valoración del denominado “*mínimo vital cualitativo*” o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Entre estos criterios se pueden señalar, entre muchos otros que “*Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna, el salario mínimo no es determinante de la independencia económica, la independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional, es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes*”.

Concordado lo anterior, es claro que la dependencia que debe acreditarse, no tiene que ser total y absoluta, es decir, es posible que la persona que reclama pueda percibir rentas o ingresos adicionales, y ser beneficiaria, siempre y cuando estos no alcancen a cubrir los costos de su propia vida (CSJ 31.346 de 2008, SL 400 y SL 816 de 2013, SL 2800, SL 3630, SL 6690 y SL 14923 de 2014, SL 6390 de 2016, SL 4217 de 2018, SL 4185 de 2020).

Asimismo, ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2698 de 2019 que, para declarar la existencia de la dependencia económica, además de otras condiciones, es necesario demostrar que el aporte proveniente del causante hubiera sido significativo y proporcionalmente representativo en relación con los otros ingresos percibidos por quien reclama. En la anterior providencia se reiteró al respecto sobre el mismo concepto lo ya

indicado en las sentencias CSJ SL 14923 de 2014, reiterada en SL 15116 de 2014 y SL 14539 de 2016:

“Por otra parte, es importante recordar que la dependencia económica de los padres se debe definir y establecer en cada caso particular y concreto para el momento del deceso del afiliado, tema que es bien definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006, bajo el concepto del mínimo vital cualitativo, según el cual deben ser evaluadas las condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular, por lo que para hablar de independencia económica se debe contar con los recursos suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.”

En igual sentido, en sentencia SL2180-2021, en la que hizo alusión a la SL5605-2019, ilustró lo concerniente a la dependencia económica, así:

“De otra parte esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres o a los hijos dependientes para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640 – 2014, CSJ SL9640 – 2014, SL8928 – 2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007, y CSJ SL31205-2007).

Con ello se entiende que la dependencia económica de los padres o de los hijos respecto de aquéllos, que aspiran al reconocimiento como beneficiarios, no tiene que predicarse total y absoluta respecto del pensionado fallecido; no obstante no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte del progenitor o del descendiente se convierte en dependencia económica SL 14539-2016, SL 4103-2016 y SL 16184 -2015 y con ello deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores o de éstos eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial de las condiciones de su subsistencia”

Descendiendo al presente asunto, analizada la prueba documental en conjunto con las declaraciones recibidas por los testigos y los interrogatorios de parte realizado, esta Sala extrajo lo siguiente:

En lo referente al interrogatorio de parte realizado a la señora **Maria Lucía Flórez**, esta afirmó que se separó del señor Guillermo de Jesús Castañeda, quien era su esposo y padre de sus 4 hijos desde que mataron a su hijo mayor Wilson Castañeda. Que es ama de casa. Que su esposo era muy agresivo con ella y sus hijos, consumía mucho licor y drogas. Que cuando su esposo la dejó, fue su hija Claudia Viviana quien la ayudó con los gastos del hogar por un tiempo y le dio estudio a su hermana Marcela y a su hermano Andrés. Que vivía en el barrio el Salvador en una casa que su hija Claudia le pagaba, vivía con su hijo Andrés Felipe por 4 años aproximadamente. Que posteriormente

se pasaron a otro apartamento, más arriba del Salvador, donde duraron alrededor de 2 años. Que para el momento en que su hijo Andrés Felipe empezó a trabajar como diseñador de moda, fue este quien se hizo cargo de ella, mientras que su hija Claudia Viviana la dejó de ayudar porque ella tiene su familia. Que en año 2001 le fue reconocida por Colpensiones pensión de sobreviviente por la muerte de su hijo mayor Wilson Guillermo Castañeda Flórez, quien murió en el año 1997, prestación reconocida por el valor de un salario mínimo legal. Que después de que su hijo Andrés se hizo cargo de ella, se fueron a vivir a las Mellizas en Buenos Aires y que era este quien cubría los gastos del hogar. Señaló que todos los recibos llegaban a su nombre, gastos de los cuales pagaba de arriendo \$900.000, alimentación \$500.000, parabólica \$120.000. Indicó que le entregaba a su hijo Andrés la suma de \$400.000, valor que le quedaba de la pensión, debido a que le hacía un descuento de esta con ocasión de un préstamo que hizo a favor del causante. No recuerda la fecha en que realizó el préstamo, ni para qué su hijo usó ese dinero. Que Andrés antes del accidente que sufrió en 2012 ya le había pedido que realizara el préstamo. Que su hijo ganaba un salario de \$2.000.0000 ya que así se lo manifestó él y vio un cheque por ese valor, pero que no recuerda desde qué año él empezó a ganar ese valor. **Que para el momento de la muerte de Andrés no vivía con el señor Guillermo.** Que hace dos años recogió a este último porque le habían hecho una cirugía de corazón abierto y columna, por lo que necesitaba de alguien que estuviera al tanto de él, razón por la que vivía con Andrés y ella. Que el afiliado fallecido no le daba ningún dinero. Que no es pensionado. Que hay un establecimiento comercial a su nombre pero que este es de una de sus hijas, el cual cerró por la pandemia. Que en la actualidad vive con su hija Claudia Viviana después de la muerte de su hijo, ya que no tiene para pagarle un apartamento y su otra hija Marcela depende de su esposo. Que el señor Guillermo perdió su trabajo aproximadamente en el año 2005. Que su hijo Andrés Felipe murió en 2017 en las mellizas, donde vivió por aproximadamente 15 días. Que en ese apartamento fue donde murió su hijo. Que al momento de la muerte trabajan en Joy Staz pero no recuerda desde cuando empezó a trabajar ahí. Que no tenía hijos ni pareja.

Por su parte, la testigo **July Marcela Castañeda Flórez**, quien es hermana del causante e hija de la demandante, expuso que su madre María Lucía vivió la mayor parte de su vida en el Salvador. Que allí vivió en dos casas, en la

primera de ella vivía con su hermano Andrés Felipe y su padre Guillermo Castañeda, que en ese momento aún era soltera y tiempo después en el 2006 se fue a vivir con su esposo. Que, para ese entonces, su padre ya se había ido de la casa, así que solo vivía con su hermano y su mamá. Que entre los años 2014 y 2017, cuando se pasaron a la otra casa, vivían Andrés y la señora Lucía y un tiempo atrás se llevaron a vivir con ellos al señor Guillermo por la situación de este último con ocasión de una cirugía de corazón, donde vivió con ellos aproximadamente un año. Que su hermano como tal no se hizo cargo de los gastos del señor Guillermo, sino que como este estaba ahí, por motivos de su recuperación, esos gastos que Andrés hacía también lo acogían. Que después de la muerte de Andrés, su hermana mayor Claudia Viviana se los llevó a vivir con ella y su familia. Que, en este momento, a raíz de la muerte de su hermano, el señor Guillermo vive en una pieza que ella, con ayuda de su esposo, le paga en el barrio Guayabal. Que su padre no es pensionado y que con este nunca tuvo buena comunicación. Que su hermano Andrés Felipe fue quien se hizo cargo de su madre cuando empezó a trabajar como diseñador de moda. Que su salario era de \$2.000.000, advirtiendo que una parte de su salario le era consignado en su cuenta y otra parte se la pagaban por fuera. Que su hermano era quien corría con todos los gatos del hogar como arriendo, servicios, claro, alimentación y sus gastos personales. Que el causante contaba con algunos créditos, pero desconoce las entidades donde los solicitó. Asimismo, desconoce el valor total de los gastos personales, pero conoce los valores que pagaba de vivienda, alimentación y servicios. Que sabe que su madre recibe \$400.000, valor que le queda de su pensión luego del descuento del prestamos que había realizado en favor de Andrés Felipe y que no era mucho en lo que podía ayudarle a su hijo con los gastos del hogar, debido al poco dinero que le quedaba de la pensión que percibe. Añadió que su hermano Andrés Felipe era quien llevaba los gastos del hogar en el que vivía con su madre. No sabe en qué usaron el dinero del crédito que realizó su madre en favor de Andrés Felipe. Tiene conocimiento que su hermano no tuvo hijos, novia o pareja. Que en cuanto a los valores que Andrés pagaba por **gastos del hogar para él y su madre, manifiesta que desde 2010, cuando empezó a trabajar, paga los valores ya mencionados hasta el día que falleció**, pero no tiene conocimiento de los valores que pagaba anteriormente. Que su hermano percibía un salario aproximado de \$2.000.000, pero que le cotizaban por un mínimo y la empresa le daba por fuera el resto del dinero en

efectivo, pero no sabe si hay registros o pruebas de ello. **Que tiene conocimiento de lo anterior porque su hermano se lo comentó.** Que Andrés tuvo una moto y después un carro, haciéndose cargo de todos los gastos de estos, pero desconoce el monto de lo que pagaba. Que la relación entre ella y el señor Guillermo no es muy buena, pero le ayuda, ya que es su padre y no lo va a dejar en la calle. Que su hermana mayor fue quien los ayudó cuando su padre se fue de la casa en 1995 o 1994, antes de que su hermano Wilson falleciera en 1997.

También se recibió el testimonio de **Blanca Ledy Hincapié de Álvarez**, quien fue vecina de la señora María Lucía Flórez cuando esta vivía en el segundo piso y ella vivía en el tercer piso, en el barrio el Salvador. Que la conoce aproximadamente hace 20 años. Afirmó que en la actualidad la demandante no vive con el señor Guillermo. Que ellos tienen un tiempo en el que vivían, pero que él cada vez que quería la dejaba y se iba. Que vivieron desde 2012 al 2016 más o menos. Que, para el momento de la muerte de Andrés, la demandante y el señor Guillermo vivían juntos, pero después de eso ya no viven juntos, toda vez que este vive en una pieza en el barrio Guayabal y lleva ahí aproximadamente un año. Hizo relación a los lugares donde vivió la demandante con su hijo Andrés Felipe en el Salvador y posteriormente en las Mellizas en Buenos Aires, donde no vivieron si quiera un mes ya que en ese mes murió Andrés Felipe. Que entre los años 2012 y 2015, cuando Andrés vivía con sus padres, el causante aun no trabajaba y la que corría con los gastos del hogar era hermana mayor Claudia, quien le dio los estudios también. Que cuando Andrés Felipe terminó sus estudios y empezó a trabajar fue quien tomó las riendas del hogar. Que Andrés Felipe empezó a trabajar tres años antes de morir, pero no sabe dónde, si bien hablaba mucho con la demandante no le preguntaba ese tipo de cosas. Que el señor Guillermo entre 2012 y 2015 trabajaba como contratista, pero no es pensionado. Afirmó que para los gastos del hogar este último daba muy poco y no alcanzaba para nada. Que la demandante sobrevivía de lo que le daban los hijos, porque no es pensionada. Que en el momento está recibiendo una pensión de un salario mínimo de un hijo que se murió, pero recibe solo la mitad porque quedó con un préstamo pendiente y de esa pensión se paga el crédito, pero no sabe en qué año lo hicieron. Que, para la fecha de la muerte de ese primer hijo, el señor Guillermo vivía con ellos, pero este se iba y venía igualmente entre los años

2000 y 2012. **Que de lo que hablaba con la demandante, esta le manifestó que Andrés Felipe tenía un sueldo de \$2.000.000 más o menos y es lo que vio en las colillas que la misma demandante le mostró, mas no conoce desde cuando devengaba ese salario.** Que era Andrés quien corría con los gastos de la casa, pagando arriendo, servicios, alimentación y demás. Pero que no veía directamente que pagara todos esos gastos, pues supuso que al ser Andrés Felipe quien sostenía la casa, **era a su vez quien pagaba.** **Información de la que tiene conocimiento con ocasión de la información que le suministró la misma demandante. Afirmó que las colillas de pago eran de la empresa Porvenir S.A. donde este trabajaba.** Que respecto al establecimiento de comercio que esta a nombre de la señora Lucía, manifestó que no es de su propiedad, toda vez que le pertenece a su hija Claudia, pero que esta lo puso a nombre de su madre. Que en la actualidad la demandante vive con su hija Claudia. Que Andrés tenía diversas deudas. Que la señora Lucía y el señor Guillermo no han recibido ningún tipo de dinero por parte de Porvenir S.A. Que se comunica con la demandante en diversas ocasiones o la visita.

Otro de los testimonios recibidos fue el de **Claudia Viviana Castañeda Flórez**, quien era hermana mayor del causante e hija de la demandante. Manifestó que entre los años 1996 o 1997, su padre Guillermo abandonó el hogar, por lo que fue ella quien ayudó a su madre a sostener el hogar. Que para el año 2016 la demandante y su hermano Andrés Felipe recibieron al señor Guillermo debido a los problemas de salud que este tenía. Que dicha convivencia se extendió por espacio de un año, aclarando que su padre no realizaba algún aporte, además de que no trabajaba ya que le habían realizado una cirugía de corazón y de columna. Que entre 2012 y 2016 no sabe con quién vivió su padre. Que su hermano Andrés Felipe Castañeda Flórez era diseñador de modas, quien además corría con todos los gastos de la casa, como arriendo por el que pagaba \$900.000 de un apartamento que arrendaron por medio de la agencia Las Torres y que no vivieron mucho tiempo ahí porque su hermano falleció. Que los servicios ascendían a \$200.000 o \$250.000, mercado \$500.000, Claro \$140.000, la cuota del carro que eran \$720.000 y el pago de un crédito de Falabella y otros almacenes eran aproximadamente \$600.000, indicando que los gastos ascendían a \$3.000.000 aproximadamente. Que su salario le era pagado una parte por nómina que se consignaban a su cuenta y

otra parte por fuera de la nómina que se la pagaban en efectivo, pero desconoce el valor total porque considera que es algo personal y no cuenta con ningún soporte o prueba de ello. Que su hermano fallecido solicitó un crédito al banco de Occidente a nombre de su mamá María Lucía y ese crédito se lo descuentan a su madre la de pensión que recibe, por lo que a esta solo le quedan \$400.000, de los cuales Andrés le decía que por ejemplo pagara ella los servicios y con el resto lo usara para comprar sus cosas personales, pero como él le debía un dinero a otra persona que se la había prestado para realizar un paseo, así que el carro se vendió para poder pagar ese dinero. Añadió que su padre ha manifestado que no tiene derecho a que se le reconozca parte de la pensión por la muerte de su hijo Andrés Felipe. Que si bien, en un principio le ayudaba económicamente a su madre, se desentendió de esta obligación una vez dicha responsabilidad recayó en Andrés Felipe, quien fue la persona que se hizo cargo de su madre. Que en ocasiones especiales le da un aporte a su madre. Que una vez falleció su hermano empezó a convivir nuevamente con sus padres; sin embargo, con relación a su padre le tuvo que decir que se fuera, ya que era conflictivo. Que tenía un negocio de ropa, el cual puso el establecimiento a nombre de su mamá por problemas con su matrimonio, pero que es la misma Claudia quien figura en todas las facturas, mientras que su madre no recibe dinero por concepto de este local. Finalizó resaltando que su hermano Andrés Felipe no tuvo hijos o pareja.

Por otro lado, la juez decretó de manera oficiosa el interrogatorio de parte del señor **Guillermo de Jesús Castañeda**. Este afirmó que en la actualidad no trabaja por problemas de salud. Que Andrés Felipe era diseñador de moda, ganaba aproximadamente \$2.000.000 o un poquito más. Que vivía con él y su madre María Lucía, no le realizaba ningún aporte ni le daba dinero, solo le daba la alimentación y vivienda mientras el se recuperaba de su cirugía. Que la señora María Lucía recibía un dinero de una pensión por la muerte de su hijo mayor desde 2005 más o menos y ella se la daba a Felipe para colaborar con los gastos, pero la mayoría de los gastos los pagaba Andrés ya que de ella se descuenta el pago de un crédito que está a su nombre, pero no sabe para qué fue. Afirmó que no recibe dinero de esa pensión. Que son ella y las hijas quienes le colaboran pagando una habitación en el barrio Guayabal donde vive y la alimentación. Que Felipe pagaba de arriendo \$700.000, alimentación

\$500.000 aproximadamente. Afirmó que no reclama la pensión por la muerte de su hijo Andrés Felipe Castañeda porque no tiene derecho a ella, y la que la merece es la mamá ya que es la que siempre ha estado ahí. Que la señora María Lucia es la encargada de los estudios de una de sus nietas.

De acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con base en el cual el operador judicial tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables (Ver sentencias CSJ SL2049-2018 y CSJ SL1469-2021), esta Sala del Tribunal concluye que se encuentra demostrado que la señora MARIA LUCÍA FLÓREZ acreditó la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo Andrés Felipe Castañeda Flórez, por haberse demostrado la dependencia económica.

De la prueba testimonial se evidencia que la demandante es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, con ocasión de la muerte de su hijo Wilson Guillermo Castañeda Flórez, quien murió en el año 1997, prestación que asciende al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad; la actora en un principio convivió con su hija Claudia Viviana, pero que una vez su hijo Andrés Felipe, por quien actualmente se reclama la pensión de sobrevivientes, empezó a laborar, se fue para otra casa a vivir con su madre y era este quien cubría en mayor parte del gastos del hogar, siendo unánimes los testigos en manifestar que lo percibido por la actora por mesada pensional no le era suficiente para subsistir.

Con relación a la remuneración percibida por el causante, los testigos afirman que este devengaba \$2.000.000, mientras que la testigo Claudia Viviana Castañeda Flórez afirmó que ascendía a \$3.000.000; aunque se debe destacar que el conocimiento de los deponentes obedece a información que el causante o la misma demandante les comentó, hechos que los convierte en testigos de oídas; sin embargo, de la copia de la historia laboral de Porvenir S.A. visible en la página 38 a 43 del pdf "01ProcesoOrdinarioEscaneado", se

observa que el causante realizó aportes a la seguridad social en pensión a través de su empleador por los siguientes ingresos base de cotización: enero a junio de 2016 \$689.455; enero de 2017 \$750.000; febrero a agosto de 2017 \$1.500.000 y septiembre de 2017 \$1.718.750.

También se destaca la prueba documental visible en las páginas 25 a 35, esto es, el extracto financiero de la cuenta de ahorros del afiliado, donde se muestran pagos quincenales durante el año 2017 bajo la leyenda “PAGO DE NOM INDUSTRIAS JOY S”, que sumados superan los \$2.000.000 mensuales.

De la prueba testimonial recaudada a lo largo del proceso se demuestra que la mayor parte de los gastos del hogar que compartían la demandante y su hijo Andrés Felipe, eran cubiertos por este último, toda vez que lo percibido por la actora por concepto de mesada pensional no le era suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Indicaron que los gastos del hogar se dividían en arriendo, servicios públicos, servicios con el operador Claro y alimentación o mercado, los que podían ascender a más de \$1.700.000.

En conclusión, no se encuentra acreditado que, para el momento en que el señor Andrés Felipe falleció, una persona distinta a este cubriera los gastos de su hogar, el que compartía con su señora madre. No se puede afirmar entonces que la suma que recibe la demandante de la pensión denote independencia económica.

Respecto de lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en especial, en sentencia SL386-2023, señaló lo siguiente:

“Ahora, también ha advertido que ante la circunstancia de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido no excluye su derecho a obtener la prestación. La única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas (CSJ SL, 12 feb. 2008, rad. 31346, reiterada, entre otras, en las providencias CSJ SL2800-2014, CSJ SL6558-2017 y CSJ SL1243-2019).”

Y, es que, para acreditarse que la demandante dependía económicamente de su hijo, no se requiere necesariamente que se demuestre el valor exacto del dinero aportado, toda vez que la norma no hizo tal exigencia. Únicamente se requiere, a través de cualquier medio probatorio, que se acredite que el aporte

económico del hijo va dirigido a satisfacer distintas necesidades, como la alimentación, transporte, recreación, vivienda. Insistió la Corte en la sentencia acabada de citar, que para el legislador la importancia de la prueba radica en que se demuestre que la contribución del hijo proveía en un porcentaje más o menos importante para el sostenimiento de sus padres, signo inequívoco de un natural sentimiento afectivo.

“Al punto, la Corte también ha explicado que la aseveración que sobre los gastos familiares hagan los reclamantes solo constituye un estimado económico subjetivo de un consumo aproximado, cuya cuantificación se calcula a priori, sin que ello represente, en estricto sentido, una afirmación pormenorizada o rigurosa de las cargas reales que imponen el sostenimiento de un hogar (CSJ SL2022-2021).”

Aunado, tal como esta Sala lo sostuvo en providencia CSJ SL6502-2015, ese requisito no está previsto en la ley, de modo que no podría exigirse a la demandante el cumplimiento de cargas adicionales o ajenas a las contempladas en la legislación.

En efecto, en dicha providencia esta Corporación adoctrinó:

[...]

Ahora bien, para efectos de la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es necesario acreditar «el monto del dinero aportado» por el causante, como lo plantea el casacionista, por la razón de que ese requisito no se encuentra previsto en la ley, de modo que no podría exigirse a los demandantes el cumplimiento de cargas adicionales o ajenas a las contempladas en la legislación, que, en este caso, se concretan en la carga de demostrar la dependencia económica, para lo cual existe plena libertad probatoria en favor de la parte actora, por una parte, y libertad de apreciación de las pruebas en favor del juez, por otra.

En similar sentido, esa exigencia, construida ficticiamente por el casacionista, además de no estar prevista en la ley, coloca en una situación desventajosa y complicada a la parte accionante, en la medida que la prueba del monto exacto de la contribución del causante al sostenimiento del hogar, es de muy difícil consecución, si se tiene en cuenta que, generalmente, el aporte económico y material no viene representado en un suma de dinero única, sino en contribuciones de distinta índole, orientadas a satisfacer distintas necesidades, como la alimentación, transporte, recreación, vivienda, entre otras.

De esta suerte, la propuesta del recurrente deja a un lado que el apoyo a los padres no solo se manifiesta en la entrega de sumas de dinero, sino también en el suministro de otros bienes materiales, igualmente valiosos para la satisfacción de sus necesidades básicas y elementales, que han de tenerse en cuenta a la hora de valorar la subordinación económica de los padres con respecto a los hijos. Evidentemente, este ejercicio fue realizado por el juez de alzada, al señalar que el causante ayudaba a solventar los gastos del hogar en cuanto a la alimentación, estudio, transporte y demás gastos domésticos.”

Corolario de todo lo dicho, quedó probado con los testimonios que la destinación de la ayuda económica del afiliado era suficiente y esencial para sostener los gastos fundamentales del hogar. Se concluye entonces que el soporte económico que realizaba era transcendental para el sostenimiento del hogar compartido con la demandante, lo que torna a esta en dependiente económicamente de su hijo.

Con relación al señor Guillermo de Jesús Castañeda, este no mostró interés alguno en la pensión reclamada, al punto de señalar que la única beneficiaria de la prestación es la demandante. Tampoco hizo un esfuerzo por demostrar que dependía económicamente de su hijo Andrés Felipe, pues si bien habitaba en el mismo apartamento que este y la actora, tal hecho se debió a que se encontraba de paso, mientras se recuperaba de unos problemas de salud.

Esta Sala no hará pronunciamiento alguno con relación a las condenas económicas por concepto de mesada, retroactivo pensional e intereses moratorios, por no haber sido objeto de apelación.

Por las razones señaladas, la sentencia merece ser **CONFIRMADA** en tal sentido.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por Porvenir S.A.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir adelante la apelación formulada por Porvenir S.A., son de su cargo y en favor de la demandante. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** íntegramente la sentencia de la primera instancia que se revisa por vía de apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esa providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



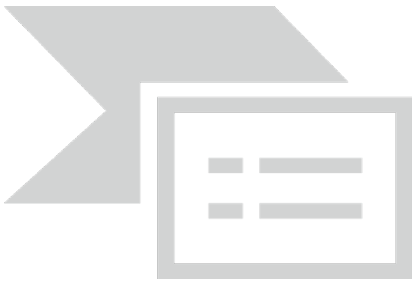
GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Maria Lucía Flórez
DEMANDADO	Porvenir S.A.
LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA	Guillermo de Jesús Castañeda Castañeda
RADICADO	05-001-31-05-017-2019-00742-01
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN	CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Fijado el 29 de mayo de 2023 a las 8:00am	Se desfija el 29 de mayo de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO